

## EL NUEVO LABORISMO: ¿MANTENERSE A FLOTE?

Peter Mair<sup>1</sup> presenta una argumentación atrevida y muy interesante, sobre todo porque ofrece un informe coherente de la política «constitucional» del gobierno de Blair que, de hecho, elimina la aparente «paradoja» de la tercera vía. Aprecio su intento, aunque no acaba de convencerme, en parte porque más parece una descripción de lo que ya ha sucedido que una explicación. Me parece que hay varios problemas que esa argumentación no solventa, ni probablemente puede hacerlo. El primero es su premisa fundamental: que «parece poco convincente suponer simplemente que Blair y sus colegas no saben lo que están haciendo». Pero si la historia nos enseña alguna lección, es la de que los políticos con frecuencia no saben lo que hacen. La suposición de Mair de que no es así en este caso es más bien sorprendente. Así, por ejemplo, su interpretación de la reforma de la Cámara de los Lores, que considera un intento de hacer prevalecer la competencia de los expertos frente al faccionalismo, puede ser plausible. Pero por el momento no lo es más que la sugerencia de que es un revoltijo, esto es, una combinación de destacados dirigentes de partido con notables designados a dedo, con una pincelada de figuras elegidas y un remanente hereditario, elaborada por gente que realmente no sabe adónde va.

Tampoco explica su argumentación por qué se han frenado las reformas, precisamente en el momento en que más relevancia cobraban. Hasta ahora, los cambios institucionales –descentralización, nueva regulación electoral, elección directa de los alcaldes– se han visto limitados a las autoridades subordinadas o intermedias; mientras que si se trata de eliminar o modificar el sistema de democracia de partidos, como sugiere Mair, cabría esperar que las reformas en la cúspide fueran cruciales para el actual gobierno. Pero claramente no lo son. Así pues, «no saber hacia dónde va» parece una característica de la orientación general del Nuevo Laborismo. Aunque el primer ministro ha dicho repetidamente, por ejemplo, que el objetivo del gobierno es la «modernización» de Gran Bretaña, ha sido absolutamente incapaz de explicar exactamente a qué se refiere. Si sólo tene-

---

<sup>1</sup> Véase «Democracia sin partidos. Aparentes paradojas del Nuevo Laborismo», *NLR* 3, Madrid, julio/agosto de 2000, pp. 150–161. Las respuestas de David Marquand y Anthony Barnett aparecen en *NLR* 4, Madrid, septiembre/octubre de 2000.

mos una vaga idea de lo que puede querer decir, es en parte porque el propio *Labour Party* no se ha mostrado unánime al definir en qué consiste esa modernización. Para Blair parece significar un cambio en las relaciones personales, esto es, conductas sociales democráticas y abiertas, que traigan consigo un código de conducta más incluyente. Para otros representa un ataque a los «intereses creados» y a la inercia económica en nombre de una sociedad totalmente meritocrática, perspectiva que alguna relación tiene con la de Blair. Y también los hay, particularmente entre quienes no están tan descontentos del Viejo Laborismo, que piensan que se trata de un impulso renovado por la «igualdad». Probablemente se trata de un poco de todo, más que de una u otra cosa en concreto.

### *Presiones en favor de la reforma*

El análisis de Mair también minusvalora, a mi juicio, las circunstancias específicas que determinaron en gran medida el programa de reforma constitucional del gobierno. Aunque Mair se muestre escéptico con respecto a la idea de que el Nuevo Laborismo simplemente heredó las autonomías para Escocia y Gales, el nuevo Ayuntamiento londinense, etc., la verdad es que fue así. La autonomía relativa del *Labour Party* escocés, el respaldo generalizado al autogobierno en Escocia por parte de todas las instituciones locales importantes y los partidos políticos, con la excepción del conservador, y el sentimiento de agravio por la forma en que había sido tratada Escocia por el parlamento «inglés» en tiempo de los *tories*, todo ello hizo de la autonomía escocesa un compromiso inevitable para cualquier gobierno laborista. Lo mismo se puede decir del Ayuntamiento de Londres. La abolición del antiguo Gran Consejo londinense por Mrs. Thatcher fue para ella una victoria pírrica. Existía un sentimiento ampliamente compartido, incluso por miembros del partido conservador, de que negarle a Londres, casi con exclusividad entre las grandes ciudades, una autoridad central elegida por los votantes, era un error tanto por motivos sociales y económicos como políticos. Ésa fue una de las razones para que los conservadores nunca se opusieran seriamente a su restauración bajo un nuevo aspecto. La autonomía de Gales quizá se podría haber evitado, pero el gobierno sufría en cualquier caso una tremenda presión por parte del partido laborista galés para que convocara un referéndum.

Pero por inevitables que fueran esas medidas, las pruebas sugieren que el gobierno se sentía muy nervioso al respecto, por lo que trató de limitar su alcance. La segunda pregunta del referéndum escocés, sobre el derecho de la Asamblea escocesa a recaudar un impuesto sobre la renta adicional, fue idea del primer ministro, y fue una suerte para él y para Escocia que se planteara así. El gobierno hizo también cuanto pudo por limitar la elección del alcalde y el Ayuntamiento de Londres, quitándoles la mayoría de los poderes que un gobierno descentralizado podía esperar. La autoridad de la Asamblea de Gales es igualmente débil. Donde el análisis de Mair está más acertado, probablemente, es en la elección directa del alcalde de Londres, que va contra la tradición del laborismo. Ha habido, es cierto, relevantes figuras laboristas en los gobiernos locales. Herbert Morrison, en Londres, y Patrick Dollan, en Glasgow, se parecían más a primeros ministros que a jefes corrientes del partido; pero se trataba de casos excepcionales. La elec-

ción directa del alcalde de Londres representa muy probablemente el intento de establecer una democracia sin partidos y desideologizada, centrada alrededor de una personalidad dominante. Precisamente por esa razón había criticado Ken Livingstone la elección directa, aunque fue desde luego esa modalidad la que le permitió ser elegido. El problema para cualquier gobierno, con este tipo de democracia, es que la personalidad dominante no tiene por qué estar de acuerdo con él. La democracia sin partidos sólo funciona adecuadamente si se trata de una persona leal hacia el gobierno.

Estaría de acuerdo con Mair en que la pretensión de la estrategia gubernamental consiste en sortear al partido, quitándole de las manos las cuestiones delicadas. De ahí el recurso a los referéndums. Esa estrategia podría derivar de una meditada teoría de la democracia. Pero es más probable, sin embargo, que provenga de la convicción, compartida ampliamente por la dirección del partido antes y después de que Tony Blair se convirtiera en su líder, de que, abandonado a sí mismo, el *Labour Party* regresaría a lo que era a comienzos de la década de 1980 y resultaría «invotable». A veces se llega a expresar abiertamente esa creencia de que cualquier pérdida de control por parte de la dirección, ya sea en el partido o en los gobiernos descentralizados, acabaría en un desastre electoral. Esto es lo que a mi juicio explica la insuficiencia de muchas de las reformas y los fracasos de Gales y Londres. Pese a todo lo que sucedió en la década de 1980, el miedo a que el viejo Adam aceche en el interior del *Labour Party*, y lo arraigado de ese temor en la dirección, es de hecho bastante sorprendente. La izquierda tradicional no cuenta ahora prácticamente con poder en la base y el gobierno no ha sufrido apenas amenazas por parte de ésta ni del Viejo Laborismo en general. Aunque existe un pequeño grupo de parlamentarios descontentos, casi desconocidos, el grupo laborista del Parlamento tampoco ha ejercido mucha presión sobre el gobierno, y los sindicatos están igualmente marginados.

Pese a todo, la razón ofrecida por el primer ministro para su desconsiderada oposición a la candidatura de Ken Livingstone a la alcaldía de Londres, casi tan imprudente como todo lo que el partido hizo en la década de 1980, es que éste es considerado irremediablemente como una figura del pasado, una persona peligrosa que podría dar mal ejemplo. Livingstone, sin embargo, es un político serio; y aunque es cierto que también es travieso y que a veces es difícil saber hasta dónde puede acabar, de lo que podemos estar seguro es de que, esté donde esté, no volverá a principios de la década de 1980. Por el momento, la única gente que parece atascada en esa década es el primer ministro y sus consejeros, lo que quiere decir que harán poco por fomentar una democracia coherente, ya sea consensual o de otro tipo. Además, el propio recurso a los referéndums y los intentos de apelar directamente al electorado a través de los medios de comunicación, que tienen como efecto una marginación real del partido, son también consecuencia de una desmoralizadora falta de confianza en la capacidad de persuasión del laborismo y de su influencia moral en la sociedad británica. Cualquier cambio considerado fundamental y, por lo tanto, controvertido puede dar lugar a un referéndum: suceda lo que suceda, el Nuevo Laborismo escapa así a la obligación de decidir. El buen trato dispensado por los diarios sensacionalistas también proviene en gran medida del hecho de que el gobierno no ha diseñado una estrategia independiente para combatir su influencia, algo que ya se veía claramente incluso antes de las elecciones de 1997.

*La herencia neoliberal*

Por encima de todo, el análisis de Mair minusvalora la política económica del Nuevo Laborismo: pretende deducir una teoría de la democracia de las ambiciones más amplias del gobierno. Pero la política no se puede tratar de esa manera. La tercera vía no es tanto una fórmula para el cambio constitucional como un modelo de política económica. ¿Qué quiere decir esto? Que la tercera vía se entiende mejor considerándola un *thatcherismo* atemperado por el Viejo Laborismo. Acepta, casi en su totalidad, la política del gobierno Thatcher: privatización, desregulación, mercados de trabajo «flexibles», impuestos bajos, «reformas» inacabables del sistema educativo, caza a los defraudadores del seguro de paro...: más o menos, el conjunto del programa neoliberal; de hecho, en algunos aspectos, el Nuevo Laborismo ha ido aún más lejos que los conservadores. Ha heredado del Viejo Laborismo, sin embargo, cierta mala conciencia acerca de parte de ese programa y la sensación de que no se puede dejar al pueblo tan sólo la alternativa de nadar o ahogarse. El gasto social del gobierno, por lo tanto, no está tan estrictamente controlado como pretende. Pero de los dos elementos, el *thatcherismo* es por el momento el preponderante, sin duda. Esto es lo que hace de las elecciones de 1997 algo tan extraordinario: la política del partido que ganó por tan amplia mayoría no difiere significativamente de la del partido que perdió tan abrumadoramente.

Esto tiene claras implicaciones constitucionales. La primera es que la tercera vía no tiene una vocación tan inclusiva como pretende, ni podía tenerla dados sus antecedentes. Alguna gente queda ciertamente fuera. Es difícil, por ejemplo, mantener que los trabajadores del sector público se ven «incluidos». Su posición es hoy día apenas mejor de lo que era con los conservadores; y a juzgar por las declaraciones públicas del primer ministro, no se trata de una casualidad. Incluso si el gobierno trata de hecho de mejorar —digamos— el salario de los maestros, el intento se ve acompañado por tanta intimidación burocrática que deja a los afectados tan amargados como podían estarlo antes. Además, las instituciones que en otro tiempo representaban hasta cierto punto a los trabajadores del sector público, como las autoridades educativas locales, corren actualmente un riesgo aún mayor que con los conservadores. Sus poderes se han visto redistribuidos, bien al mercado o a autoridades comparativamente débiles, responsables únicamente ante el Estado central. Dudo que sean muchos los trabajadores del sector público que se sientan incluidos en esa «democracia consensual». La segunda implicación, que se deduce de la primera, es que las tensiones constitucionales que atravesaban el *thatcherismo* se han trasladado tal cual al Nuevo Laborismo. En cierta forma, el *thatcherismo* parecía apuntar a la dispersión y debilitamiento del poder burocrático centralizado. Pero esa tendencia se vio frustrada por el hecho de que, en opinión del gobierno conservador, instituciones políticas intermedias como los organismos de la Administración local, que se podrían haber beneficiado de ella, constituían con demasiada frecuencia reductos de la vieja política económica y del Viejo Laborismo, que habían decepcionado al país. Dado que no se podía confiar en que el pueblo «se liberara» a sí mismo, había que empujarlo a la libertad. El gobierno actual, igual que su predecesor, se ve arrastrado por lo tanto por dos impulsos contradictorios: el deseo de descentralizar el poder, y el de centralizarlo en el ejecutivo o en agencias fácilmente domi-

nadas por el Estado. De los dos, el segundo es mucho más fuerte. Hasta la retórica está tomada tal cual del régimen anterior. Como indica Anthony Barnett, el Nuevo Laborismo utiliza con frecuencia la palabra «libre», pero raramente la palabra «libertad». El término «libre» significa en sus labios, si es que significa algo, «libertad en el interior del mercado». Como tal, tiene una larga tradición *tory*. En 1950, los conservadores prometieron «liberar al pueblo», y con ello no querían decir que fueran a limitar el poder del ejecutivo ni a introducir la representación proporcional.

El análisis de Mair exhibe también ciertas contradicciones. En determinado momento pisa el acelerador y una «democracia consensual sin partidos» relativamente inocua se convierte por las buenas en la mucho más siniestra «democracia plebiscitaria». No es lo mismo, aunque ambas representen ciertos aspectos del Nuevo Laborismo, como sucedía con el anterior gobierno conservador. Esa tensión presente en el artículo de Mair puede atenuarse, sin embargo, si reconocemos que el Nuevo Laborismo no parte *ex novo*, sino que ha heredado una economía política cuyas implicaciones constitucionales y políticas son enormemente ambiguas, por no decir contradictorias. Estoy de acuerdo con él en que uno de los objetivos del gobierno Blair consiste en despolitizar la acción política. Esto, sin embargo, proviene, no de una teoría coherente de la democracia, sino del legado de sus predecesores, que también tenían el objetivo de despolitizar: con los conservadores, el votante medio se consideraba como un cliente, un consumidor, un inversor..., cualquier cosa menos un ciudadano políticamente activo. La despolitización, sin embargo, era algo que debía alcanzarse mediante un Estado centralizado cuyos poderes, no sólo no disminuían, sino que en muchos casos se acrecentaban. A este respecto también el Nuevo Laborismo es heredero del Viejo, tan apegado al Estado británico y a su aparato constitucional. Que dos gobiernos tan deliberadamente innovadores como los de Thatcher y Blair no puedan romper efectivamente con las tradiciones dominantes del gobierno británico apoya la tesis de Tocqueville de que a cualquier sociedad, por revolucionaria que sea su retórica o su conducta, por buenas que sean sus intenciones democráticas, le resulta extraordinariamente difícil apartarse de la estructura política y constitucional que hereda.